

Santiago, veintitres de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en estos autos compareció don MAURICIO ANDRÉS RODRIGUEZ OSSA, abogado, soltero, cédula de identidad N° 13.432.866-5, domiciliado para estos efectos en calle Nueva York N° 57, Piso 4, Santiago, Región Metropolitana quien interpone demanda de reconocimiento de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones en procedimiento de aplicación general, en contra de la MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, representada legalmente y de acuerdo al artículo 4° inciso primero del Código del Trabajo, por doña DANIELA ALEJANDRA PEÑALOZA RAMOS, sicóloga, cédula nacional de identidad N° 15.312.767-0, alcaldesa de la Municipalidad de Las Condes, ambos con domicilio en Avenida Apoquindo N° 3400, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Expone que el 14 de diciembre del año 2018, suscribió contrato con la Municipalidad de Las Condes bajo la modalidad de honorarios, para cumplir funciones como Gestor Técnico Comunitario con cargo al programa “CENTROS COMUNITARIOS 2019”, de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dicho contrato sería a plazo fijo por dos meses con una mensual de \$621.270, que se mantuvo los meses de enero y febrero de 2019.-

Posteriormente en el mes de abril de 2019, suscribió un nuevo contrato a honorarios para cumplir funciones en Atención Profesional Específica en las áreas asistencial o psicológica como profesional de apoyo en las actividades relacionadas con el buen uso del tiempo libre”, también con cargo al programa “CENTROS COMUNITARIOS 2019”, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, desde abril hasta diciembre del año 2019, con una renta promedio mensual de \$853.333.-

En diciembre de 2019 suscribió otro contrato para continuar desempañándose en el mismo programa dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, entre



enero a diciembre del año 2020, teniendo un sueldo promedio mensual de \$931.500.

Señala que al término del año 2020 firmo el último contrato de honorarios con la Municipalidad para desempeñar las mismas funciones y programa y esta vez el sueldo promedio era la cantidad de \$938.500, desde enero a diciembre del año 2021.

Explica que en el mes de noviembre del año 2021, se le envió una comunicación electrónica donde se le avisa que debía entregar los antecedentes incluyendo su Curriculum y declaraciones juradas pertinentes, para la renovación del contrato durante el año 2022, como se acreditara en su oportunidad envié todos los antecedentes a la jefatura respectiva, no obstante con fecha 29 de diciembre del año 2021 sin expresión de causa se le informa que sus servicios ya no eran necesarios, culminando definitivamente el día 31.

Refiere que los contratos firmados con la municipalidad indican que se desempeñaba como Gestor Técnico Comunitario, prestando apoyo y asesorías varias a los vecinos de la comuna de Las Condes, derivando las situaciones de los vecinos en algunas ocasiones a la Corporación de Asistencia Judicial. En dichas funciones se le encomendó la tramitación de algunos juicios en los juzgados civiles y de familia, en los que participó como abogado patrocinante, más otras gestiones ante órganos administrativos, pero las funciones principales eran la atención y orientación de índole legal a diversas consultas efectuados por los vecinos de la comuna de Las Condes, efectuando dichas labores en primer lugar en el "Centro Comunitario Diaguitas" ubicado en la calle Diaguitas N° 911, Comuna de Las Condes y el año pasado en la unidad de mediación familiar, en dependencias municipales ubicadas al costado del templo de Los Dominicos, de la misma comuna.

Estas funciones las cumplía diariamente de lunes a viernes sin marcar tarjeta de asistencia ya que las atenciones eran telefónicas o por correo electrónico a los



vecinos y conjuntamente a lo anterior tenía la obligación de acudir a lo menos un día a la semana, para dar atención y orientación legal a los vecinos de la comuna de las Condes, lo cual debía realizar en un horario entre las 09:00 a las 13:00hrs o las 15:00hrs hasta las 17:30hrs como consta en los calendarios de atención a los vecinos que acompañará en su oportunidad.

Agrega que debía elaborar periódicamente informes a su jefe directo, don Bernardo Cristian Norambuena Castro, quien primero se desempeñó como jefe Departamento de Gestión Territorial y posteriormente como jefe de la unidad de mediación familiar, quien daba cuenta de sus funciones a instancias superiores del municipio. De hecho, debía actualizar constantemente las causas que llevaba la Comuna de Las Condes como patrocinante, listado de causas que también ofrece acompañar.

Cita doctrina y jurisprudencia para luego referirse a las definiciones que establecen los artículos 3 y 7 del Código del Trabajo y lo señalado en el artículo 8 del mismo texto. Asimismo en relación al pago de las cotizaciones previsionales alude a la aplicación de los artículos 17, 18, 19 del Decreto Ley 3500 en relación al artículo 13 de la Ley 17322, conforme los cuales el empleador tiene la obligación de pagar las remuneraciones y descontar de ellas las sumas correspondientes al pago de las imposiciones y el deber de entregarlas a los organismos de seguridad social: presumiéndose han sido descontadas y pagadas mensualmente, lo que en el presente caso no ocurrió por lo que también reclama la nulidad de despido a la luz de lo que establece el artículo 162 incisos 5 y 7°.-

Estima que en la especie ha existido un despido injustificado para lo cual menciona el artículo 168 del Código del Trabajo que establece que, cuando el contrato de trabajo termine por aplicación de alguna de las causales de los artículos 159, 160 o 161, y considere el trabajador que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no haya invocado causal legal, podrá recurrir al juzgado laboral a fin de que éste lo declare, procediendo la indemnización de aviso previo y la de años de servicios incrementada en el



porcentaje que corresponda en caso de ser declarado indebido. En la especie, al alegarse un despido injustificado, indebido o improcedente en base a la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, el incremento solicitado es de un 50% en base a lo establecido en el artículo 168 letra a) del mismo cuerpo legal.

Conforme a los hechos descritos y en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y siguientes, 41, 45 y siguientes, 446 y siguientes del Código del Trabajo, y artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, pide, tener por deducida la demanda laboral en contra de la Municipalidad de Las Condes, ya individualizada y reconociendo la existencia de la relación laboral la condene al pago de las prestaciones adeudadas e indemnizaciones legales, nulidad del despido, y en definitiva declarar: 1.- La existencia de la relación laboral con la demandada entre el 01 de enero del año 2019 al 31 de diciembre del año 2021.- 2.- Que se condene a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo, cuyo monto es \$938.500. 3.- Que se condene a la demandada al pago de indemnización por años de servicio, cuyo monto es \$2.815.500. 4.- Que se condene al pago de las vacaciones legales y proporcionales, por los periodos 2020 y año 2021, a un total de \$1.877.000.- 5.- Que se condene al pago de las cotizaciones previsionales de AFP, ISAPRE Y AFC, por todo el periodo trabajado. 6.- Que se declare la nulidad del despido y V.S. de lugar al pago de la remuneración hasta la convalidación del mismo. 7.- Que se condene a la demandada al pago del recargo legal de 50% respecto de la indemnización por años de servicio, por el monto de \$1.407.750, conforme lo dispone el artículo 168 del Código del Trabajo. 8.- Las sumas demandadas y que ordene pagar sean reajustadas, aplicando además el interés máximo permitido para operaciones reajustables, según lo dispone el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo. 9.- con costas.

SEGUNDO: Que en representación de la MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, compareció don Rogelio Erazo Román, abogado, cédula de identidad N°



4.887.957- 8, quien previo a la contestación opuso excepción de incompetencia absoluta del Tribunal en razón de la materia.

Refiere que no es efectivo que entre el demandante y el Municipio haya existido una relación laboral, ni vínculo de subordinación o dependencia alguno, por la simple razón de que para una Municipalidad tal supuesto es sólo posible en los términos previstos en el artículo 3° de la Ley N° 18.883, situación en la cual no se encontraba el actor, luego, resulta del todo improcedente entender que la relación contractual habida entre las partes de este litigio, pudiera estimarse como regida por las normas del Código del Trabajo, cuando en los hechos, la contratación fue posible dado lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, siendo en consecuencia aplicables en la especie, las disposiciones del propio Contrato que ligó a las partes y las normas del Derecho Civil. Indica que las prestaciones a honorarios como las que ligaron a las partes de este litigio, por expresa disposición del artículo 4° de la Ley N° 18.883, en relación con el artículo 15 de la Ley N° 18.575, no están sometidas a las normas laborales, sino que se rigen, en primer lugar, por las reglas fijadas en el respectivo contrato y, en subsidio, por las normas del Código Civil, particularmente las que se refieren al arriendo de servicios inmateriales, contenidas en el Párrafo 9 del Título XXVI del libro IV por lo tanto este tribunal resulta ser incompetente para conocer en autos, por la sola aplicación del artículo 420 del Código del Trabajo, que indica cuáles materias son de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, entre las que destacan: “a) Las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones o fallos arbitrales en materia laboral (...) g) Todas aquellas materias que las leyes entreguen a los Juzgados de Letras con competencia laboral”. Luego, las materias que son de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo siempre suponen al menos la presencia de un trabajador, o de un empleador, o de ambos, sin embargo, el legislador no ha entregado competencia a dichos Tribunales para conocer de los conflictos jurídicos que pudieran originarse entre un prestador de servicios a



honorarios y quien contrata dicha prestación de servicios, quienes por cierto, no revisten las calidades jurídicas ni de trabajador, ni de empleador, respectivamente. En este contexto, cabe agregar que la presencia eventual de determinadas características laborales en dichas prestaciones de servicios a honorarios, como por ejemplo, el cumplimiento de horario, días de vacaciones, jornada de trabajo y eventual dependencia de una jefatura, no modifican la normativa legal pertinente, fundamentalmente el Estatuto Administrativo, ni el Contrato a Honorarios, de suerte que los eventuales indicios de laboralidad que pudieran observarse, no pueden significar la mutación de un contrato de prestación de servicios a uno de carácter laboral, más aún, si el Municipio sólo puede contratar bajo este estatuto de acuerdo con lo previsto en el artículo 3° de la Ley N° 18.883, situación en la que, como se dijo, no se encontraban los servicios prestados por el demandante. Por lo expuesto, las normas legales citadas y demás pertinentes, pide tener por opuesta la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal en razón de la materia y acogerla

En subsidio contestó la demanda señalando que para el caso que no fuese acogida la excepción opuesta, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 452 del Código del Trabajo, contesta la demanda deducida en contra de la Municipalidad de Las Condes por don Mauricio Andrés Rodríguez Ossa, solicitando que ésta sea rechazada en todas sus partes, con costas,.

Expone que el Municipio, con miras a cumplir la finalidad que la ley le impone, esto es, el satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural, desarrolla dentro de otras gestiones, Programas que van en directo beneficio de la Comunidad. Dentro de estos Programas se encuentran, entre otros, aquellos destinados a la capacitación, desarrollo, y crecimiento personal y social, destinados a los vecinos de la Comuna. Los mencionados Programas se vienen desarrollando, con algunas variaciones en determinados casos según los requerimientos y necesidades de la comunidad local, desde hace ya varios años en la comuna, los cuales tienen una duración



definida, la cual la mayor de las veces es anual y para efectos de que se puedan materializar al año siguiente, nada garantiza que ello suceda, requieren previamente de la existencia de un presupuesto destinado a tal efecto y que éste sea aprobado con antelación. Así, si bien dichos Programas llevan ya varios años implementándose, no existe certeza respecto de que se pueda garantizar su continuidad ininterrumpida en el tiempo, pues ello depende de diversos factores, entre otros, su pertinencia, oportunidad y disponibilidad financiera, de suerte que bien puede suceder que determinados Programas que resultaron ser poco atractivos o de bajo impacto en la comunidad, se terminen, manteniéndose aquellos que produjeron un efectivo beneficio social, lo cual deja en evidencia lo accidental y no habitual de los servicios proporcionados por aquellas personas que prestan servicios a honorarios en dichos Programas, distintos de las funciones habituales y permanentes en el tiempo que debe desarrollar el Municipio. Dentro de los distintos aspectos presupuestarios a considerar en estos Programas anuales, se encuentran entre otros, el monto asignado para gastos en personal del Programa. Lo anterior explica la contratación de personal a honorarios por un período determinado de tiempo, circunscrito a un Programa determinado, cuya duración tiene fecha cierta y respecto de los cuales no existe certeza de su continuidad en el tiempo, resultando del todo evidente que terminado un Programa determinado, termina también el contrato a honorarios de quienes prestaban servicios en ese Programa y a contrario sensu, al nacer un nuevo Programa, surge la necesidad de contratar a prestadores de servicios a honorarios por Programa. Ahora bien, evidente es que los mencionados Programas deben estar adscritos a algún Departamento de una determinada Dirección Municipal, para efectos de verificar que el Programa se cumpla en cuanto a sus objetivos, pero ello en ningún caso puede significar subordinación o dependencia al Municipio, por parte de los prestadores de servicios a honorarios en dichos Programas, en relación con las labores que deben desarrollar. Cabe agregar además que dentro de este contexto, el hecho de contratarse a honorarios a las mismas personas año tras año para el evento de que el Programa de que se trata vuelva a realizarse,



encuentra su fundamento en lo adecuado que resulta contar con personal que tiene y ha desarrollado competencias únicas y específicas, abocadas en forma particular al desarrollo de su cometido, independiente y completamente separado de la gestión propiamente municipal, lo que le da la característica de transitoriedad y circunstancialidad a sus funciones, en la medida en que éstas se encuentran supeditadas a la duración particular del Programa al que acceden. Lo señalado se relaciona con la discusión, desde el momento en que el demandante en esta causa prestó servicios a honorarios para el Municipio en el marco de los referidos Programas. Así, el demandante de autos suscribió sucesivos contratos a honorarios con el Municipio, los cuales tenían cada uno de ellos, un plazo fijo de duración, extendiéndose cada uno de ellos según las necesidades de la Comunidad y del Municipio. Todos los contratos a honorarios que se fueron celebrando año a año, eran ratificados mediante el respectivo Decreto Alcaldicio. En cada uno de los contratos que celebró con el Municipio, el demandante se obligó para con el mismo a cumplir una función específica o cometido en cumplimiento de los objetivos de un Programa determinado, el cual a su vez estaba a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio. En todos los Contratos que celebró el demandante con el Municipio, se acordó que el vínculo entre las partes se regía exclusiva y excluyentemente por el Contrato que se suscribía y el respectivo Programa, así como de igual modo, que el Municipio podía poner término anticipado al Contrato en cualquier momento, sin expresión de causa, no teniendo el demandante derecho a indemnización alguna. Como contraprestación a sus servicios, el demandante recibía, previa presentación de la boleta de honorarios respectiva, la cual debía ser visada, una suma de dinero, según lo estipulado en sus respectivos Contratos a Honorarios, por concepto de honorario bruto anual, al cual se le descontaba el porcentaje correspondiente, por concepto de Impuesto a la Renta, y el que para efectos de su pago se parcializaba mensualmente, por cada uno de los meses del año que duraba el respectivo contrato, en sumas de igual valor.



En este contexto, no existe una relación de subordinación y dependencia, como afirma el demandante, ni tampoco un contrato de trabajo, en los términos estatuidos en el Código del ramo, sino que un vínculo contractual entre las partes, fruto de su autonomía para vincularse jurídicamente, el cual tenía una fecha clara de inicio y término, y respecto del cual no puede presumirse una continuidad, no obstante la celebración de Contratos a Honorarios sucesivos, pues según se expuso, nada garantizaba la continuidad de un Programa determinado en el tiempo, lo cual entre otros aspectos, responde a temas presupuestarios.

En lo referente a la prestación de sus servicios, el demandante cumplió siempre cometidos o encargos, expresados de forma clara y precisa en cada uno de los Contratos a Honorarios a que se ha hecho referencia, cometidos que iban en relación directa con el Programa de que se trataba. El último de los Contratos suscrito entre el demandante y el Municipio, se extendió entre el 1° de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Refiere que las Municipalidades se encuentran facultadas para contratar personas bajo las normas del Código del Trabajo y a Honorarios, en los casos que la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, señala en sus artículos 3° y 4°, respectivamente. En cuanto a las personas contratadas bajo el régimen a honorarios, el inciso final del artículo 4° de la citada ley, dispone que: “Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”. De lo expuesto se desprende que las personas contratadas a Honorarios, no tienen la calidad de funcionarios Municipales y tienen como única norma reguladora de sus relaciones el propio Convenio, el que constituye el marco jurídico que determina sus derechos y obligaciones, respecto de lo cual ha señalado la Contraloría General de la República, que “..., entre otros, en sus dictámenes N°s. 3.451, de 1997; 12.473, de 2002 y 46.985, de 2007, que las personas que prestan servicios a la Administración del Estado sobre la base de honorarios, no poseen la calidad de funcionarios públicos y tienen como única



norma reguladora de sus relaciones con ella el propio convenio, el que constituye el marco jurídico que determina sus derechos y obligaciones. Por lo anterior, las reglas que en tales convenciones estipulen las partes constituyen, tanto para la Administración como para el prestador del servicio, el marco vinculante de sus correspondientes derechos y obligaciones

De lo expuesto precedentemente, se concluye que las normas contenidas en el Código del Trabajo, no son aplicables a los funcionarios municipales ni a los trabajadores que prestan servicios a honorarios, salvo en aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos, situación que, en la especie, no concurre conforme a las normas legales antes citadas. Sin perjuicio de lo anterior, y tratándose del caso particular de las personas que prestan servicio a honorarios para un Programa Municipal cualquiera, la normativa que faculta a los distintos Municipios a ese tipo de contratación, es el Decreto N° 1.186 del Ministerio de Hacienda, publicado el 18 de enero de 2008, que Modifica Clasificaciones Presupuestarias, el cual modificó el Decreto N° 854 del año 2004 de la misma cartera, que, entre otros, dispuso: "Modifícase el Decreto de Hacienda N° 854, de 2004, en los siguientes términos: A. En el N° 2: GASTOS a) Agregase en el Subtítulo 21 Gastos en Personal, Ítem 04 Otros Gastos en Personal, la Asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios"... ... B. En el N° 3: CLASIFICADOR DE GASTOS a) Agregase en el Subtítulo 21 Gastos en Personal, Ítem 04 Otros Gastos en Personal, la Asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", con la siguiente definición: "Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia". (sic), de lo cual se colige que el actuar del Municipio en todo momento ha sido de acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal vigente, siendo la contratación del



demandante bajo la modalidad de contratos a honorarios ajustada a Derecho. No obstante en el caso sub lite, en cada uno de los contratos a honorarios celebrados, existió una relación jurídica-contractual de carácter civil, por medio de la cual el actor se obligó a prestar un servicio determinado. El Artículo 1°, inciso tercero, del Código del Trabajo Regular supletoriamente esta especie de contratos, las normas contenidas en los artículos 2006 y siguientes del Código Civil. Dicha relación jurídica, presentaba principalmente, las siguientes características: a) Se trataba, en cada caso, de un contrato a honorarios a plazo fijo o determinado, sin posibilidad de renovación de ningún tipo. b) La prestación del demandante consistía en la realización de un cometido, el que se encontraba en el contrato a honorarios, clara y específicamente determinado. c) Como contraprestación, el Municipio se obligaba en dicho contrato a honorarios, a pagar una suma de dinero, con deducción del impuesto correspondiente al Impuesto a la Renta, sin perjuicio de otros beneficios estipulados en dicho instrumento. d) el demandante entregaba boletas de honorarios mensuales para obtener el pago de la renta estipulada en el contrato. Así, los términos de la contratación siempre fueron claros y precisos, tanto para el demandante, como para el Municipio, por lo que, resulta contradictorio que ahora el demandante señale la existencia de una supuesta relación laboral, puesto que la conducta desplegada por las partes, en cada uno de los contratos a honorarios, demuestran todo lo contrario, hablamos que la demandante es de profesión abogado.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y termina señalando que atendida la inexistencia de una relación laboral entre la Municipalidad de Las Condes y el demandante de autos, resulta improcedente cualquier pretensión de éste, en orden a que se reconozca una relación de carácter laboral entre las partes, así como a que se le paguen las prestaciones que solicita.

Por otro lado hace presente que el demandante no estaba sujeto a órdenes de ninguna jefatura, pues no tenía jefe, sino que al cumplimiento del cometido a que se obligó, cuya verificación correspondía de acuerdo al último de sus Contratos a



la Dirección De Desarrollo Comunitario. Por lo demás, el demandante tenía libertad de ejercer otras actividades, no siendo sus servicios de exclusividad de la Municipalidad, demostrando que respecto al demandante no existía vínculo de subordinación o dependencia. El Municipio, en ningún momento se obligó en ninguno de los Contratos que celebraron las partes, a pagarle las cotizaciones de seguridad social al demandante. Luego, si el Municipio no se obligó, mal puede entonces haber incumplido algo a lo que no se obligó en ningún momento. En el mismo orden de ideas, la parte demandante elude que en virtud de la Ley N° 20.255 de 17 de marzo de 2008, todas las personas que prestan servicios bajo la modalidad de honorarios tienen la obligación personal, no traspasable a la persona o entidad a quien prestan sus servicios, de realizar cotizaciones previsionales para pensiones, seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por lo demás, de acuerdo al artículo 17 del D.L. N° 3500 de 13 de noviembre de 1980, el pago de las cotizaciones previsionales es de cargo del trabajador, correspondiéndole al empleador solo su retención y posterior entero en la institución previsional correspondiente, por lo que no es procedente que se solicite que el demandado pague, a su costa, las cotizaciones, pues en el presente caso es un hecho que su parte nunca ha hecho retenciones de naturaleza previsional respecto del actor, pues ello es jurídicamente inadmisibles en un régimen de prestación de servicios a honorarios.

Tampoco el Municipio ha incurrido en un incumplimiento de una no escrituración de un Contrato de Trabajo, desde el momento en que en ninguna ocasión se obligó a ello para con el demandante, ni tampoco la relación habida entre las partes fue de naturaleza laboral. Sí se suscribieron distintos Contratos a Honorarios a los que voluntariamente prestaron su consentimiento las partes, tal y como se acreditará en la oportunidad procesal pertinente, cuya naturaleza jurídica es distinta de la que el demandante pretende ahora se le reconozca. En ningún momento el Municipio ha incurrido en el incumplimiento de un no pago de feriado legal o proporcional, desde el momento en que nunca estuvo a ello obligado, sin perjuicio de que las personas que prestan servicios a honorarios para el Municipio



disponen libremente de su tiempo, de suerte que en los hechos, el demandante sí se ausentó cometido tras cometido durante algunas semanas, las que él estimó, en las cuales como cualquier persona, tomó vacaciones, pues resultaría contrario a las máximas de la experiencia, pensar que una persona prestó servicios ininterrumpidos por más de 7 años seguidos. La nulidad de despido es improcedente en casos en que, como en el de la especie, se discute entre las partes la existencia de un vínculo normado por el Código del Trabajo. Con todo, de existir la obligación de un pago de estas prestaciones en este tipo de casos de contratos a honorarios, previamente debe establecerse y declararse por sentencia firme y ejecutoriada que el vínculo obedece a una relación laboral y no de honorarios. Por este motivo, la Municipalidad jamás se encontró obligada al pago de cotizaciones previsionales y/o de salud, ya que no existió un vínculo de naturaleza laboral entre las partes, por lo que malamente podría encontrarse en mora de pagarlas y al no incurrir en el supuesto que sanciona el artículo 162 ya referido, esto es, retener del pago de la prestación de servicios respectiva una suma determinada, para luego debiendo enterarla al ente previsional correspondiente, no hacerlo, no incurre en la conducta a sancionar, por lo que malamente se le puede sancionar por una conducta en la que nunca incurrió.

Para el improbable evento de que se considere que en el caso en estudio la situación fáctica en que el demandante prestó sus servicios no se ajustaba a los términos del artículo 4° de la Ley N° 18.883, estaríamos en presencia de un acto ilegal de la administración cuya sanción sería la nulidad del contrato a honorarios, mas no su transformación en un contrato de trabajo, no pudiendo pretenderse que una supuesta irregularidad se solucione cometiendo una irregularidad de la misma entidad. Nuestro ordenamiento jurídico no contempla como sanción para los actos de la administración que no cumplan con los requisitos legales la transformación del acto en uno de distinta naturaleza, y si ello fuera admitido, el acto al cual se transformaría aquel viciado debe ser jurídicamente posible, lo que no ocurriría en el caso de autos.



Por lo expuesto, en atención a lo anteriormente señalado, las disposiciones legales ya citadas, y demás pertinentes, pide tener por contestada, en subsidio, la demanda de reconocimiento de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales, deducida en contra de la Municipalidad de Las Condes por don Mauricio Andrés Rodríguez Ossa, solicitando que ésta sea rechazada en todas sus partes por improcedente, con costas.

En subsidio a la contestación a la demanda efectuada, para el evento en que la posición jurídica sostenida por el Municipio en ella sea rechazada, total o parcialmente, y en consecuencia, se estime que en la especie no ha existido una prestación de servicios a honorarios, sino que una relación regulada por las normas del Código del Trabajo, opone excepción de prescripción de la acción y/o derechos, tanto respecto del feriado legal, como de las cotizaciones impagas que se piden durante el período de la relación laboral, y demás prestaciones que correspondan, por el período que antecede a los 2 años anteriores a la fecha de la interposición de la demanda. Lo anterior, fundado en lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, en particular, en su inciso primero, donde se indica que “...Los derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles...”.

Para el evento en que no se acoja la prescripción alegada precedentemente respecto de las cotizaciones impagas que pide el demandante durante el período de la supuesta relación laboral, o bien acogándose dicha prescripción alegada, pide no se le condene al pago de las cotizaciones impagas por el periodo de la relación laboral de que se trataría. Lo anterior fundado, como se ha dicho, en cuanto a que en ningún momento el Municipio se obligó en ninguno de los Contratos que celebraron las partes, a pagarle las cotizaciones de seguridad social al demandante. Por lo demás, de acuerdo al artículo 17 del D.L. N° 3500 de 13 de noviembre de 1980, el pago de las cotizaciones previsionales es de cargo del trabajador, correspondiéndole al empleador solo su retención y posterior entero en la institución previsional correspondiente, por lo que no es procedente



que se solicite que el demandado pague, a su costa, las cotizaciones, pues en el presente caso es un hecho que mi parte nunca ha hecho retenciones de naturaleza previsional respecto del actor, pues ello es jurídicamente inadmisibles en un régimen de prestación de servicios a honorarios. A lo ya señalado, agrega que condenar al Municipio al pago de esas cotizaciones, significaría un doble pago respecto de un mismo concepto, lo cual desnaturalizaría la contribución y la obligación a la deuda, pues por una parte estaría el pago que el demandante ha debido realizar por ley respecto de esas cotizaciones o el que voluntariamente pudo haber realizado con anterioridad y por el otro, aquél al que el Municipio puede llegar a ser condenado, no justificándose según se ha indicado, un doble pago respecto de un mismo concepto.

TERCERO: Que llamadas las partes a conciliación no se produjo estableciéndose como **HECHOS NO CONTROVERTIDOS:** 1. El actor prestó servicios para la demandada y como **HECHOS CONTROVERTIDOS:** 1. Si los servicios prestados por el actor o los contratos por este celebrados, lo fueron bajo subordinación o dependencia, en la afirmativa, fecha de inicio, las funciones que desempeñaba el demandante y el monto de la remuneración que percibía. 2. Fecha, antecedentes y circunstancias del término de la relación laboral, cumplimiento de las formalidades del artículo 162 del Código del Trabajo si precediere. 3. Efectividad de haberse compensado u otorgado los feriados que reclama el actor. 4. Efectividad de haberse pagado las cotizaciones de seguridad social de este, en la afirmativa, periodo.

CUARTO: Que a fin de comprobar su pretensión la parte demandante incorporó los siguientes medios de prueba;

Documental: 1.- 4 copias de contratos de honorarios entre Municipalidad de Las Condes y don Mauricio Rodríguez Ossa, de fecha 14 de diciembre del 2018; 18 de abril del 2019; 20 de diciembre del 2019; y 7 de diciembre del año 2020. 2.- 3 copias de decretos respectivos municipales en relación a los contratos de honorarios de fecha 18 de abril del 2019, 10 de enero del 2020; y 09 de enero del



2021. 3.- 25 boletas de honorarios de don Mauricio Rodríguez Ossa a la Municipalidad de Las Condes, de fecha la primera de 20 de enero del año 2019 a fecha 20 de diciembre del año 2021. 4.- 1 copia de certificado laboral emitido por el administrador municipal de Las Condes, don JUAN IGNACIO JARAMILLO MICHAELIS, de fecha 15 de marzo del año 2021, que señala una lista de trabajadores esenciales a honorarios en actividades propias del Municipio, del 1 al 331, siendo el 162, don MAURICIO RODRIGUEZ OSSA. 5.- 9 copias de permiso único colectivo, solicitado por la MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES en la página de la Comisaría Virtual de Carabineros, a nombre de don MAURICIO RODRIGUEZ OSSA. 6.- 24 páginas de correos electrónicos entre la Municipalidad de Las Condes y don MAURICIO RODRIGUEZ OSSA, dando instrucciones para labores jurídicas. 7.- 2 copia de pantallazos del teléfono de don Mauricio Rodríguez Ossa de fechas 14 de julio y 30 de agosto del 2021, de una funcionaria de la Municipalidad de Las Condes, de nombre Karen, dando instrucciones al demandante. 8.- Estado de causas vigentes al 04 de noviembre del año 2020, elaborado por el demandante a la Municipalidad de Las Condes con algunas causas civiles que acreditan su participación en los procesos. 9.- 25 páginas de hojas que señalan la atención de don Mauricio Rodríguez Ossa a vecinos del Municipio de Las Condes. 10.- Hoja correspondiente al mes de abril del año 2021 que informa la atención telefónica vía la aplicación whatsapp con vecinos de la Comunidad de Las Condes. 11.- Copia de pantalla de página de la Municipalidad de Las Condes, en la inauguración el Centro Comunitario Diaguitas. 12.- Copia de pantalla de Instagram de don Mauricio Rodríguez Ossa, con fotografía de él, que señala las actividades a realizar en Centro Comunitario Diaguitas, dependiente de la Municipalidad de Las Condes.

Confesional: Se desiste

Testimonial: Comparecen como testigos doña Dolores del Rocío Maldonado Valdés, Rut N°11.648.258-4; don Santiago Lennon Orellana, Rut N° 8.547.238-6 y don Bernardo Cristián Norambuena Castro, Rut N° 12.959.031-9.



Otros medios de prueba: 1.- Inspección del tribunal página instagram de don MAURICIO RODRIGUEZ OSSA, en su relación con la Municipalidad de Las Condes: <https://www.instagram.com/tv/CI3pd8Hgt/?hl=es-la> Exhibición de documentos: 1.- Informes de evaluación o desempeño realizados a don Mauricio Rodríguez Ossa. 2.-

Exhibición de documento; conocido como “Declaración Jurada Simple de Inhabilidades e Incompatibilidades”, firmado tanto por don Mauricio Rodríguez Ossa y la Municipalidad de Las Condes; Exhibición del listado de causas judiciales llevadas por don Mauricio Rodríguez Ossa desde el año 2019 al año 2021.

QUINTO: Que por su parte la demandada, incorporó la siguiente prueba;

Documental: 1. Contratos a Honorarios celebrados entre el Municipio, y don Mauricio Andrés Rodríguez Ossa. 2. Decretos Alcaldicios que ratificaron los distintos Contratos a Honorarios y sus respectivas modificaciones, celebrados entre el Municipio, y don Mauricio Andrés Rodríguez Ossa: 2.1. Decreto Alc. Secc. 1ª N° 2228 de 18 de abril de 2019. 2.2. Decreto Alc. Secc. 1ª N° 681 de 18 de enero de 2019. 2.3. Decreto Alc. Secc. 1ª N° 83 de 09 de enero de 2021. 2.4. Decreto Alc. Secc. 1ª N° 242 de 10 de enero de 2020. 3. Decretos Alcaldicios que ponen en vigencia los Programas para los cuales don Mauricio Andrés Rodríguez Ossa prestó servicios. 3.1. Decreto Alc. Secc. 1ª N° 7485 de 28 de diciembre de 2020. 3.2. Decreto Alc. Secc. 1ª N° 8985 de 28 de diciembre de 2018. 3.3. Decreto Alc. Secc. 1ª N° 8089 de 31 de diciembre de 2019. 4. Programa “Centros Comunitarios 2021”, Departamento de Gestión territorial Municipalidad de Las Condes. 5. Programa “Centros Comunitarios 2020”, Departamento de planificación social y estudio, Municipalidad de Las Condes. 6. Programa “Centros Comunitarios 2019”, Departamento de Gestión Contratos y talleres, Municipalidad de Las Condes.



Confesional: Absuelve posiciones el demandante don Mauricio Andrés Rodríguez Ossa.

Testimonial: Se desiste

Exhibición de documentos: 1. Declaración de renta anual durante los últimos 3 años. 2. Documento donde conste inicio de actividades y su giro. 3. Pago al impuesto durante los últimos tres años si procediere. 4. Certificados del pago de cotizaciones del demandante. 5. Boletas de Honorarios emitidas por la demandante durante todo el periodo que prestó servicios para la Municipalidad de Las Condes.

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA

SEXTO: Que conforme al artículo 4 de la Ley 18.883, podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, mediante Decreto del Alcalde. Del mismo modo se podrá contratar sobre la base de honorarios a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera. Además se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este estatuto.-

Por otro lado, el artículo 420 del Código del Trabajo en su letra a) establece que serán de competencia de los Juzgados del Trabajo; las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral.

Que de acuerdo al artículo 4° de la Ley 18.883 precedentemente descrito, el órgano municipal puede realizar contrataciones tanto de carácter civil como de



carácter laboral, y teniendo en consideración que la acción intentada tiene precisamente por objeto la declaración de la existencia de un vínculo laboral en los términos del Código del Trabajo, el tribunal llamado por Ley para dilucidar la naturaleza contractual, según indica el artículo 420 del Código del Trabajo, es esta sede laboral, razón por la que debe ser rechazada la excepción opuesta.

EN CUANTO ALA DEMANDA

SEPTIMO: Que teniendo en consideración que lo que se debe dilucidar es si el demandante efectivamente se desempeñó bajo un vínculo laboral en los términos de los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo o lo fue en un marco jurídico distinto, se debe tener presente, que de acuerdo al Código del Trabajo, del Código del Trabajo, el contrato es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia o subordinación del primero y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo precedente hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.

De lo expuesto se desprende, que el trabajo que protege la norma jurídica en comento es aquel personal, consensual, bilateral y oneroso, que se realiza para otra persona de manera profesional y bajo subordinación o dependencia.

En este contexto, recae en la parte demandante la carga probatoria relativa a establecer fehacientemente la existencia del vínculo laboral, por tanto le corresponde comprobar que quien demanda posee la calidad de trabajador y ha prestado servicios personales intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo, como lo describe el artículo 3° letra b) del Código del ramo; que a su vez, el demandado, efectivamente ha cumplido un rol de empleador, ha utilizado y se ha beneficiado de los servicios personales del actor, también en un contexto de subordinación y dependencia;



que los servicios prestados se conocen con precisión, sin ser necesario pormenorizarlo; que los ha prestado por cuenta ajena, esto es, los riesgos de lo favorable o desfavorable de los resultados del trabajo los asume el empleador y así también el monto de la remuneración convenida.

OCTAVO: Que para tales efectos, la prueba documental incorporada permite apreciar que mediante Decreto Alcaldicio N° 681 de 2019 de 18 de enero de 2019 la Municipalidad de Las Condes autorizó la contratación a honorarios del demandante para cumplir el cometido de Gestor Técnico Comunitario a contar del 14 de diciembre de 2018 para llevarse a cabo entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, estableciéndose para el total del periodo un valor de \$1.380.600.- Imputándose el gasto al programa Prestaciones Servicios Comunitarios N° 002 Honorarios Programas Recreacionales.

El contrato fue suscrito con la misma fecha 14 de diciembre de 2018 y hace referencia al Programa Centros comunitarios para Dirección de Desarrollo Comunitario “De Atención Profesional Específica en las Áreas Asistencial o Sicológica Profesional de Apoyo en las Actividades Relacionadas con el Buen Uso del Tiempo Libre”

Los honorarios por cada mes alcanzaron a \$690.300 a los cuales les fue efectuada la retención correspondiente quedando en un honorario líquido de \$621.270.- cada mes previo certificación del cumplimiento de su cometido. Este contrato solo se mantuvo por los meses de enero y febrero de 2019.-

En la cláusula décima se estableció que no tendría la calidad de funcionario municipal para ningún efecto.

Posteriormente, mediante Decreto Alcaldicio N° 22228 de 18 de abril de 2019, de la Municipalidad de Las Condes, se autorizó la contratación de personal a honorarios para un programa emitido por la Dirección de Desarrollo Comunitario, específicamente para el Programa Centros comunitarios 2019 para el cual fue contratado el demandante, cuyo cometido consistió en Áreas Asistencial o



Sicológica Profesional de Apoyo en las Actividades Relacionadas con el Buen Uso del Tiempo Libre” para desempeñarse entre el 15 de abril al 31 de diciembre de 2019, asignándosele un valor total de \$7.680.000 Imputándose el gasto al programa Prestaciones Servicios Comunitarios N° 002 Honorarios Programas Recreacionales.

El contrato fue suscrito con fecha 12 de abril de 2019. La renta percibida durante cada mes ascendió a un monto líquido de \$480.000 el primer mes y los restantes de \$810.000, ya efectuada la retención. Este contrato estableció que el departamento de Gestión Territorial sería el encargado de supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato.

Luego, mediante Decreto Alcaldicio N° 242 de 10 de enero de 2020, se autorizó la contratación a honorarios del demandante para el cometido Gestor Técnico comunitario para desempeñarse entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, asignándosele un valor total de \$11.178.000 imputándolo Prestaciones Servicios Comunitarios N° 002 Honorarios Programas Recreacionales.

El contrato fue suscrito con fecha 20 de diciembre de 2019, en este contrato el honorario líquido mensual se estableció en la suma de \$831.364.-

La cláusula sexta de este contrato menciona que el Departamento de Gestión Territorial de la Dirección de Desarrollo Comunitario será la unidad municipal encargada de verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas en el presente contrato. Igualmente se deja constancia que no adquiere la calidad de funcionario municipal y no queda sujeto a subordinación o dependencia respecto a persona alguna del municipio sino solo obligado a cumplir aquello para lo cual se le contrató y para lo cual la Municipalidad le facilitará sus dependencias y medios tecnológicos para que el prestador de servicios puede cumplir el cometido en forma adecuada.



Más tarde, en la cláusula octava, se indica que el vínculo que relaciona a las partes se regirá en cuanto a sus derechos y obligaciones, exclusiva y excluyentemente por las disposiciones del presente contrato y del Programa.-

Mediante Decreto Alcaldicio N° 83 de 09 de enero de 2021 se autorizó la contratación a honorarios del demandante, con cargo al Programa Centros Comunitarios 2021, para el cometido Gestor Técnico Comunitario entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021, asignándosele un valor de \$11.262.000 imputándolo Prestaciones Servicios Comunitarios N° 002 Honorarios Programas Recreacionales.

El contrato fue suscrito con fecha 07 de diciembre de 2020.

Tanto este contrato como el anterior dejan establecido que entre sus funciones a la municipalidad le compete el desarrollo comunitario y la asistencia social a través de las cuales busca mejorar las condiciones de vida de sus habitantes labor que ejecuta con cargo a sus respectivos programas que anualmente se ponen en vigencia asignándoseles un presupuesto determinado para su ejecución, el que debe coincidir con cada ejercicio presupuestario y como no solo se requiere de recursos materiales sino también humanos, elemento esencial para la consecución de los fines propuestos y su ejecución por tratarse de labores no habituales o accidentales que se desarrollan, incluso en distintos días, horarios y lugares de la comuna y se requiere de su apoyo para el logro de los objetivos.

Se reitera que el cometido es para Gestor Técnico Comunitario, imputándolo a Prestaciones Servicios Comunitarios N° 002 Honorarios Programas Recreacionales, siendo el honorario mensual correspondiente de \$830.572.-

El vínculo que relaciona a las partes se rige por este contrato y el programa y queda de cargo del profesional.

Que por otra parte fueron también incorporadas las boletas de honorarios emitidas por don Mauricio Andrés Rodríguez Ossa, quien mantiene el giro



“Servicios de Asesoramiento y Representación Jurídica” y quien ostenta profesión de abogado; N° 365 de mayo de 2020, 366 del mismo mes, 391 de agosto de 2020, 417 del mismo mes, 369 del mismo mes, N° 396 de diciembre de, N° 425 de 20 de diciembre de 2021, 376 de enero de 2020, 398 de enero de 2021, 381 de febrero de 2020, 388 de 20 de junio de 2020, 387 de mayo de 2020, N°421 de 20 de octubre de 2021, 416 de julio de 2021, 390 del mismo mes, N°368 de 20 de julio de 2019, N°415 de 20 de junio de 2021; N° 367 de junio de 2019, N° 386 de abril de 2020, N° 401 de 20 de marzo de 2021, 410 de mayo de 2021, 405 de abril de 2021, 399 de febrero de 2021, N° 375 de 20 de diciembre de 2019.-

NOVENO: Que de lo expuesto, emana que los contrato de prestación de servicios que fueron suscritos entre la Municipalidad y el demandante, dejan constancia que se rigen por las normas del propio contrato, no otorga la calidad de funcionario público y no genera vínculo de subordinación y dependencia, de lo cual se concluye que el régimen jurídico que regula a estos contratantes queda bajo las normas contenidas en el Código Civil.-

Por otro lado y en concordancia con lo expuesto, no se puede desconocer que estas contrataciones han sido efectuadas por una Municipalidad, cuyo estatuto legal es la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades, que considera que el ingreso, deberes, derechos y responsabilidad administrativas y así también la cesación de funciones del personal municipal, se regirá por el Estatuto Administrativo de funcionarios municipales, Ley 18.883, cuyo artículo 4º señala que podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, mediante Decreto del Alcalde. Del mismo modo, se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que requiera. Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las



personas contratadas a honorarios se registrarán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de éste Estatuto”.

A la luz de lo señalado, claro queda, que la municipalidad se ve restringida a efectuar contrataciones fuera de la norma señalada – artículo 4° - puesto que, de hacerlo, implicaría una abierta transgresión al mandato constitucional contemplado en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, en cuanto a que deben someter su actuar a la Constitución y a las Leyes y solo actuar válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma prescrita en la Ley, sin poder arrogarse otras facultades o derechos, so pena de nulidad, de modo que no podría contratar de otra forma que la señalada al demandante, quien no tiene la calidad de funcionario de planta o contrata y en consecuencia, la contratación acorde al artículo 4° del estatuto mencionado, es la única que se avizora, es decir, para un cometido específico, lo que comprende una función determinada por un tiempo acotado.

En efecto, todos los decretos que autorizan la contratación, hacen alusión a un cometido específico y por un tiempo determinado, estableciéndose en cada decreto un plazo de vigencia, todo lo cual es conocido del demandante, quien concurrió voluntariamente a su suscripción, conociendo que además, en estas circunstancias, era posible que la Municipalidad contratante podía ponerle término en cualquier momento, si estimare que sus servicios ya no eran requeridos

Por otro lado, se advierte que las boletas de honorarios no son correlativas, lo que significa que el demandante no necesariamente prestaba servicios exclusivos para la Municipalidad y de manera permanente, siendo conocido que la profesión de abogado, es de aquellas profesiones liberales, que puede ser ejercida prestando servicios para varias personas a la vez, por tanto, el hecho de desempeñarse como tal para la municipalidad bajo la modalidad de honorarios no le impide continuar ejerciendo su profesión en forma externa a la municipalidad, lo que si le estaría vedado si se tratara de un cargo de planta en como titular e



incluso a contrata, quedando en evidencia que ninguna de estas calidades jurídicas ostenta dentro del organigrama de la Municipalidad de Las Condes.

Que entonces, no es posible establecer que se trata de servicios permanentes y continuos, sino al contrario, solo han sido accidentales y para cometidos específicos.

En coherencia con lo anterior, la prueba testimonial incorporada en juicio por la parte demandante no logra modificar lo dicho, toda vez que, por ejemplo, doña Dolores Maldonado, lo conoce como abogado del Centro Comunitario Diaguitas, porque él le llevaba una causa, se atendió entre el año 2019 al 2021, la atendía a veces en la mañana a veces en la tarde. Luego don Santiago Lennon Orellana, mencionó que compartían comunidad de techo, pero profesionalmente no se cruzaron. Preguntaban por el abogado de la Municipalidad de Las Condes, a veces en la mañana o en la tarde, “no era una cosa fija” y además señaló que no conocía el Centro Comunitario Diaguitas que era donde trabajaba una vez a la semana el demandante y don Bernardo Norambuena Castro, Jefe de la Oficina de Mediación Familiar de la Municipalidad de Las Condes, señaló que le llegó una citación para presentarse como testigo, declaró que, Mauricio ingresó por la necesidad de prestar asesoría jurídica a los vecinos. En ese tiempo se hacían audiencias con el Alcalde y le pedían que contratara un abogado para asesorarlos en materias de familia y si no calificaba para la Corporación, le pedía a Mauricio que llevara la causa. Él, le decía a Mauricio a qué vecino debía llamar o asesorar o le daba el contacto. Se le decía por Watsapp el teléfono o por correo electrónico. Preguntó si lo iban a recontractar y se decidió que no y debió comunicarle. Explicó que nadie le decía a Mauricio cómo llevar una causa, nadie lo guiaba. Él sabía su materia. No marcaba ingreso ni salida. Su obligación era ir una vez a la semana al Centro Comunitario.

Por su parte, don Mauricio Rodríguez al absolver posiciones, también corroboró que iba una vez a la semana. Indicó que luego le asignaron causas para representar a los vecinos, pero nada dijo que esto último le significó modificar el



horario y ninguno de los testimonios dijo que lo veían todos los días o que se caracterizaba por cumplir férreamente una jornada en particular. Respondió que el Alcalde no le otorgaba patrocinio.-

En relación a esto último, se aprecia de los antecedentes de las causas que incorpora y que había tramitado en diferentes tribunales, por ejemplo, en la causa Rol. V – 152 – 2020 del 18° Juzgado Civil de Santiago, que en el segundo otrosí de la presentación, señala que el abogado ha sido encomendado por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Las Condes para representar a algunos vecinos que se encuentran en una situación económica que requiere asistencia.....; en la causa Rol. C – 10.772 – 2020 del 19° Juzgado Civil de Santiago, en el tercer otrosí; se indica; “... el abogado a quien le daré poder ha sido encomendado por la Dirección de Gestión Territorial de la Municipalidad de Las Condes para representar a algunos vecinos que requieren asistencia y no se encuentran actualmente en condiciones de obtener una defensa privada...”; en la causa Rol. C – 14.938 – 2020 del 10° Juzgado Civil, en el 2° Otrosí se indica; “... el abogado Mauricio Rodríguez, es una abogado externo encomendado por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de las Condes para representar a algunos vecinos...”

Es decir, resulta un hecho cierto que el demandante no actuaba en representación de la Municipalidad de Las Condes, no era el Alcalde quien le otorgaba patrocinio y su asistencia jurídica obedecía al cometido específico para el cual fue contratado y que decía relación con su particular profesión de abogado, en el programa comunitario, función que no es de aquellas habituales del Municipio.

Que el resto de la prueba incorporada, esto es, los correos electrónicos de fecha 15 de mayo de 2019, 12 de enero de 2021, 24 de junio de 2020, 05 de abril de 2021, 06 de abril de 2021, 25 de enero de 2021, 27 de enero de 2021, 12 de febrero de 2021, 11 de febrero de 2021, 09 de septiembre de 2020; 13 de noviembre de 2020, 28 de diciembre de 2020, 16 de noviembre de 2020; 28 de



diciembre de 2020; 15 de septiembre de 2021, 29 de septiembre de 2021; 06 de octubre de 2021; 13 de octubre de 2021, 20 de octubre de 2021; 10 de noviembre de 2021; 16 de noviembre de 2021; 25 de noviembre de 2021; 29 de noviembre de 2021; 07 de diciembre de 2021; 19 de diciembre de 2021 y 21 de diciembre de 2021 entre otros, así también las imágenes de whatsapp de 14 de julio de 2021, no hacen más que confirmar que efectivamente el actor prestó servicios, para la municipalidad otorgando asesoría jurídica como abogado en un programa comunitario, lo que no está discutido, pero en caso alguno alcanzan la suficiencia necesaria para modificar la calidad jurídica en que lo hizo.

Que el hecho de haberle requerido en alguna oportunidad a quién atender o haberle entregado el contacto de algún vecino, tampoco puede considerarse que se trata de directrices o del ejercicio de un poder de mando o dirección empresarial y menos la exigencia de un informe de cumplimiento previo al pago del honorario respectivo, ya que no es más que la legítima facultad de la municipalidad de controlar que los cometidos se cumplan, en razón del presupuesto asignado al específico programa y como ente público.

Que no obstante todo lo expuesto, se desprende de la exhibición documental pedida al demandante, que éste efectúa su declaración de impuestos acorde a su actividad como profesional independiente, pero más allá de eso, el certificado de cotizaciones previsionales informa que es el propio demandante quien se paga las cotizaciones previsionales en AFP Modelo y Fonasa, lo que resulta consecuente con su profesión liberal, pero además, evidencia el conocimiento acabado del demandante acerca de la calidad jurídica en la que cumplió funciones en el municipio, que no fue otra que la de una prestación de servicios a honorarios.

Finalmente, en relación a la exhibición de la declaración jurada simple de incompatibilidades e inhabilidades, se trata de un documento que junto con el certificado de antecedentes, es solicitado para verificar el cumplimiento al artículo 5° inciso 8° de la Ley 19.896, que señala, que las normas sobre inhabilidades e



incompatibilidades administrativas de los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 18.575, serán aplicables a los contratados a honorarios, de una cláusula que así lo disponga y precisamente el inciso final de dicho artículo establece que, aquellos programas presupuestarios en que laboren mayoritariamente personas contratadas a honorarios, serán regulados por resolución de las entidades correspondientes en cuanto a las condiciones y modalidades de su desempeño, como ha ocurrido en este caso, en que se ha establecido que la contratación a honorarios es para un cometido específico de la forma que indica cada uno de los contratos.

DECIMO: Que como corolario, no es posible considerar que existió relación laboral en los términos de los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, correspondiendo rechazar la demanda, resultando inoficioso emitir pronunciamiento respecto de la excepción de prescripción opuesta también por la demandada.

UNDECIMO: Que la prueba ha sido apreciada de conformidad a la sana crítica, sobre la base de las probanzas incorporadas por las partes y al tenor de la carga probatoria que les incumbe según el artículo 1.698 del Código Civil y la no expresamente mencionada no modifica lo concluido.

Por lo expuesto y teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, artículos 3, 7, 8, 9, 453, 454, 456, 496 Y 501 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 1.698 del Código Civil y Ley 18.695 y 18.883; se resuelve:

EN CUANTO A LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA

I.- Que se rechaza la excepción de incompetencia opuesta por la Municipalidad de Las Condes.

EN CUANTO A LA DEMANDA



II.- Que se rechaza la demanda interpuesta por don **Mauricio Rodríguez Ossa** en contra de la Municipalidad de Las Condes.

III.- Que atendido lo resuelto, se omite pronunciamiento respecto de la excepción de prescripción opuesta también por la demandada.

IV.- Que no se condena en costas al demandante por estimar que tuvo motivo plausible para litigar y no ha resultado totalmente vencido.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT : O-995-2022

RUC : 22- 4-0385305-8

Pronunciada por don (ña) CLAUDIA PAMELA SALGADO RUBILAR, Juez Titular (D) del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a veintitres de diciembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

